

# Los agroproductores frente a las políticas neoliberales: El Barzón y COMAGRO

Este ensayo estudia los procesos organizativos de El Barzón y COMAGRO en el contexto de la "modernización agropecuaria" resultante del giro del Estado mexicano hacia el neoliberalismo. Ambas organizaciones de agroproductores coinciden en la búsqueda de alternativas económicas y políticas para resolver la "devastadora crisis" que ha aquejado al campo en los últimos años. El Barzón se constituye como una organización de oposición a las "nuevas" políticas (1993-1994), mientras que COMAGRO se consolida como una fuerza que las apoya críticamente (1986-1994). Significativamente, a pesar de que se originaron en Jalisco, ambas organizaciones han sido capaces de converger con las luchas de un gran número de agroproductores de diversas regiones de México.

Nuestro argumento es que el reciente énfasis de "modernizar" la producción agrícola en México ha resultado de un proceso constante de luchas, acomodados y negociaciones entre políticos, tecnócratas, banqueros y productores agrícolas. Concebimos el hacer de las políticas públicas como los procesos de entretejimiento que resulta del encuentro activo de estos diversos actores. El principal objetivo de nuestra investigación es, por ello, entender las dinámicas (y contradicciones) de los procesos de decisión en relación a la producción agropecuaria. Nuestra discusión se centra en examinar el flujo de conflictos y acomodados en el que los miembros de El Barzón y de COMAGRO han estado involucrados como parte de este quehacer político.

Hemos dividido este ensayo en cuatro secciones. En la primera parte hacemos una revisión de los diagnósticos de la situación del campo en que se ha basado el diseño y la instrumentación de las políticas macro-económicas de corte neoliberal que culminaron con el Programa de Modernización del Campo (1990) y el Tratado Trilateral de Libre Comercio (1994). Las secciones segunda y tercera son un análisis de los procesos diferenciados de organización y prácticas políticas de El Barzón y COMAGRO. Nuestro objetivo es, por un lado, aprehender el entretejimiento que se da entre estas macro políticas económicas al implementarse los proyectos específicos de "modernización rural" y los cambios en las formas de negociación y lucha política de estas dos organizaciones de agroproductores y, por otro lado, conocer las formas en las que estos movimientos han incidido en la (re)configuración de las políticas rurales. Cerramos nuestro ensayo con una discusión sobre el carácter y consecuencias sociales de estos movimientos emergentes de agroproductores al margen, no sin contradicciones y tensiones, de las formas y prácticas del Estado mexicano.



**E**

ste ensayo trata acerca de los procesos organizativos de El Barzón<sup>1</sup> y **COMAGRO**<sup>2</sup> que surgen en el contexto de las políticas de modernización agropecuaria consolidadas por el régimen de Salinas. Estas organizaciones surgen como parte de la búsqueda de alternativas que productores agropecuarios han llevado a cabo para enfrentar la “devastadora crisis” que aqueja al campo mexicano. Las estrategias con las que estos grupos enfrentan el nuevo estilo de intervención del Estado hacia el campo son diferentes. El Barzón llega a constituirse como un grupo de oposición a las “nuevas” políticas, mientras que **COMAGRO** se consolida como una fuerza que las apoya críticamente. Significativamente, ambas organizaciones han sido capaces de converger con las luchas de un gran número de agroproductores de otras regiones de México, a pesar de que su radio original de acción política eran algunas zonas del estado de Jalisco.

1. El Barzón es un movimiento emergente de protesta que surgió en Jalisco a partir de agosto de 1993 y que reúne ejidatarios y pequeños propietarios de los 124 municipios del estado. Su nombre de batalla, “El Barzón”, lo tomaron del corrido popular que se canta desde los tiempos de la Revolución. Estos productores caracterizan la situación actual de forma semajante a lo que la canción dice que pasaba entonces. El barzón, la correa de cuero que unce a los bueyes con el arado, se está reventando, al igual que lo que sucedió en los últimos años del porfiriato. A pesar de ello, los agroproductores tienen que seguir trabajando para el patrón que, en los tiempos de hoy, son los banqueros. Es difícil calcular con precisión el número de miembros de la organización. En los distintos eventos organizados por El Barzón han participado, directa o indirectamente, entre 1,500 y hasta diez mil productores. En noviembre de 1993, este movimiento de protesta se constituyó en organización nacional en coalición con organizaciones campesinas de doce estados de la República.

2. Los miembros de la Comercializadora Agropecuaria de Occidente S.A. (COMAGRO) se definen como una más de las expresiones del nuevo movimiento campesino mexicano que persigue, entre otros fines, el buscar alternativas para hacer frente a las nuevas condiciones que imponen la globalización de la economía y la liberalización de los mercados. COMAGRO es una organización económica de tercer nivel que agrupa a 31 organizaciones de productores ejidales. Se constituyó en Jalisco en marzo de 1992. Esta organización se consolidó una vez ganada la lucha por los canales de distribución de FERTIMEX, paraestatal liquidada en 1991. COMAGRO está constituida por 600 mil jefes de familia, productores de maíz en su mayoría, que pertenecen a cinco estados de la República.

Nuestro argumento es que la actual modernización de la producción agrícola en México es la resultante de un proceso constante de luchas y acomodados entre políticos, tecnócratas, banqueros y productores agrícolas. Nuestra discusión se centra, por ello, en examinar los sucesivos conflictos y negociaciones entre los agroproductores de El Barzón y **COMAGRO** con los representantes del Estado mexicano y del sistema financiero. Examinamos, además, el impacto que dichas situaciones han tenido en las transformaciones, implícitas o explícitas, de la política agropecuaria. Desde esta perspectiva, nuestro problema central de investigación consiste en entender la complejidad de los procesos de toma de decisiones en relación a las políticas macro económicas vinculadas a la producción agropecuaria y, específicamente, en conocer las formas en las cuales las diferentes partes involucradas participan en estos procesos.

El adoptar esta perspectiva nos lleva, además, a revisar y reconceptualizar la naturaleza de las políticas macroeconómicas. Nuestro objetivo es, por ello, examinar el carácter del nuevo estilo de intervención del Estado, conocer los grados de flexibilidad de las políticas y, en particular, analizar las formas de participación de los productores agropecuarios en este nuevo contexto. Es decir, estudiaremos los efectos económicos, luego políticos, de la aplicación de la lógica neoliberal y de las contradicciones que resultan de su implementación. Precisamente por tratarse de fenómenos político-económicos-históricos -esto es, de procesos que se dan en un contexto continuo de lucha y mutua confrontación— es que deben estudiar los efectos en los productores agropecuarios tanto como las contradicciones al interior del Estado y del sistema crediticio. Esto nos lleva a examinar cómo el Estado, al luchar por suprimir el paternalismo e incrementar la eficiencia, adelgaza significativamente su aparato operativo abriendo, al hacerlo, nuevos espacios de participación en los procesos político-económicos que son aprovechados, y por tanto apropiados, por los productores agropecuarios. Esta perspectiva teórico metodológica nos lleva, además, a explorar el porqué y el cómo un programa como el de PROCAMPO que, en principio, es un nuevo apoyo estatal a la agricultura, se ofrece precisamente cuando el Estado propugna la erradicación de cualquier forma de

subsídios a la producción.

Antes de cerrar nuestra presentación de objetivos y posición teórica metodológica, la discusión de “lo político” urge nuestra atención. Convencionalmente, “lo político” y “la política” se definen como las prácticas, ideas y símbolos relacionados y organizados por las instituciones del Estado que, en la misma línea, se reifica y se le entiende, en consecuencia, como un bloque coherentemente estructurado e independiente. El Estado, entonces, rara vez se reconoce ni como una construcción ideológica, ni como un conjunto de relaciones de dominación históricamente construidas y legitimizadas, cuyas prácticas de gobierno (o control) son informes, fluidas y dependientes de los actores y sus contextos. En la presente discusión, en contraste, entendemos “lo político” como una vasta gama de prácticas, ideas y símbolos sociales, históricamente construidos, que va más allá de aquéllas vinculadas, o emanadas, de las actividades del Estado. “Lo político” son, consecuentemente, las formas discursivas que reciben el reconocimiento y la aprobación oficial tanto como aquéllas que se les reprueba, marginaliza o deslegitima oficialmente. En general, “lo político” y “lo económico” tienden a definirse como dimensiones separadas y mutuamente excluyentes. En contraste, sin embargo, teóricos sociales, entre otros Marx (1969,1984) y Weber (1961), han demostrado la estrecha relación que existe entre formación del Estado y capitalismo. Apoyados en estas últimas propuestas, en esta narrativa intentamos aprehender y mostrar cómo las implicaciones y consecuencias de las acciones políticas del Estado (las directrices macroeconómicas, en particular) son una de las formas en las que se concretiza y se expresa la interconexión (dialéctica, en más de los casos) que existe entre lo político y lo económico en el contexto del quehacer multifacético de productores agropecuarios, banqueros, tecnócratas y políticos.

Este documento se divide en cuatro secciones. En la primera parte hacemos una revisión de los diagnósticos sobre la situación del campo que sirvieron de marco, al Estado mexicano, para el diseño de las políticas macro-económicas de corte neoliberal que culminaron con el Programa Modernización del Campo (1990) y el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (1994). En la segunda y tercera secciones

analizamos los procesos de organización diferenciados de El Barzón y **COMAGRO**. Nuestro objetivo es examinar el entretrejimiento que se da entre los cambios en las formas de negociación y lucha política y su relación con las transformaciones que se introducen al implementarse los proyectos específicos de “modernización rural”. En la parte final discutimos el carácter y consecuencias sociales de estos movimientos emergentes de agropecuarios.

### I.-La gestación de la política “global” hacia el campo

Después de un largo periodo de negociaciones, México se suma en 1986 a los Acuerdos Generales de Tarifas y Aranceles (GATT); se intensifican, entonces, las negociaciones comerciales con el exterior. La entrada al GATT fue parte de la apertura de la economía mexicana iniciada en 1983 (Blanco 1993:8). Esto significó acelerar los cambios en las prácticas comerciales. Se dio así una drástica desgravación de importaciones, “a fines de ese año (1986)”, en palabras de Pedro Aspe, “menos de 28% del valor de las importaciones quedó sujeto a permisos, en comparación con 83% que se tenía a principios de 1985” (1993:137). El paso de “un modelo de desarrollo orientado al mercado interno, a otro orientado al exterior” (Blanco 1994: 7) respondía a “consideraciones de eficiencia interna” y a la reconfiguración de la economía mundial en grandes bloques (ibid. 7-8). Este hecho puso de manifiesto las formas en las que se venían generando, y finalmente se consolidan, cambios en la ideología y las prácticas sociales de sectores de poder vinculados al Estado mexicano.

Es importante señalar que esta discusión trascendió a los grupos de interés del gobierno e incluyó grupos de intelectuales tanto como de asociaciones campesinas ligadas (o no) a las instancias gubernamentales, que vieron en la incorporación de México al GATT la culminación de un periodo de reflexión sobre y aceptación de la realidad de “crisis” del campo mexicano. Barkin (1991) identifica, al interior de los grupos de poder político, dos corrientes de opinión que se explicitaron en la discusión sobre la apertura de México al comercio internacional que se dio en la prensa a partir de 1979. El primero de estos grupos defendía la intervención del gobierno en los procesos productivos y propugnaba la



continuidad de las políticas de autosuficiencia nacional. El otro grupo, en contraste, promovía la apertura de México al mercado internacional basada en el principio de “ventajas comparativas”.

Los diagnósticos de la crisis y el diseño de la política de modernización

Lo que el debate público y los estudiosos agrarios<sup>3</sup> identificaron como “una crisis estructural del campo” era, en realidad, la resultante de circunstancias históricas y problemas recurrentes de la vida rural, en particular, y del país, en general. Se propusieron distintos diagnósticos que si bien coinciden en algunos puntos, muestran también diferencias significativas. Los diagnósticos giraron en torno a los siguientes tópicos: (1) La disparidad entre la producción agropecuaria y el crecimiento demográfico que implicaba un déficit acumulativo de alimentos básicos a nivel nacional. (2) La propensión a importar productos agrícolas en vez de incrementar la productividad nacional que se hacía más apremiante debido a las distorsiones acumuladas entre precios internos y externos. (3) La necesidad de revisar el control de los precios de los productos básicos, los cuales, por otro lado, eran fundamentales para producir mano de obra barata de trabajadores urbanos que consensaban con la política económica. (4) El costo de los subsidios al campo en relación a la estabilidad económica y financiera. (5) Los efectos de la deuda externa y del control de la inflación hacia el campo. (6) La persistencia del intercambio desigual de la producción agropecuaria en relación con la producción industrial. (7) El deterioro ecológico manifiesto a través de las reducciones en los mantos freáticos, la contaminación de las aguas y la erosión de los suelos y bosques. (8) La creciente pobreza rural que implica la incapacidad de satisfacer las necesidades mínimas de alimentación, habitación y salud. (9) El cuestionamiento de algunos sectores a la capacidad y rol del Estado para asegurar el abasto alimenticio y la organización productiva y, finalmente, (10) El reconocimiento de que los productores y los empresarios deberían tomar un papel más protagónico

3. Barkin (1991); Caballero (1992); Calva (1998); de la Fuente (1992); Gordillo (1992); Oswald Spring (1992); Otero (1993); Téllez (1994).

en el proceso productivo.

Luis Téllez (1994), subsecretario de planeación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, explica que (1) los cambios drásticos que se dieron en el entorno macroeconómico de los ochenta, tanto como, (2) el que México hubiese llegado a los límites de su frontera agrícola, fueron los factores que llevaron al Estado mexicano a plantear la reforma de la política agropecuaria. Esta reforma partió de la reconsideración del esquema de intervención estatal basado en el control de los mercados, el otorgamiento de subsidios y la protección comercial. Sin embargo, la configuración de la política de modernización ya se venía esbozando desde sexenios anteriores. Algunos de sus rasgos actuales se pueden encontrar, por ejemplo, en la Ley de Fomento Agropecuario que se promulgó durante el gobierno de López Portillo (1981) o en el énfasis del fin del reparto agrario y en el fomento a la agroindustrialización de tiempos de Miguel de la Madrid. El Programa de Modernización del Campo (1990) representa, de hecho, una versión más radical de este proceso “modernizante”. Este texto propone, por ello:

Una redefinición del papel de la agricultura respecto al resto de la economía así como un cambio fundamental entre las organizaciones rurales y las instituciones del Estado ...  
(ibid.6)

Es así que la reconceptualización de las relaciones entre gobierno y sociedad rural se convierte en el punto medular del programa. El Estado deja de ser concebido como “el único actor de crecimiento económico” mientras que “los particulares, en forma individual u organizada”, se reconocen también como “protagonistas importantes del desarrollo” (Téllez 1994:125-126). A pesar de la claridad con la que se expresan algunas metas o “intenciones modernizantes” en el texto del Programa de Modernización del Campo, no debemos olvidar que esa retórica es una negociación que se da entre tecnócratas y políticos. Por ejemplo, las modificaciones al Artículo 27 Constitucional, que permitían la privatización de las tierras ejidales, se identificaron públicamente como la ley Téllez-Warman, siendo éstos los apellidos principales promotores

de la iniciativa.

Para sintetizar, las diferencias entre tecnócratas y políticos en relación al proyecto de modernización del campo, se pueden definir como la disputa entre dos corrientes: (1) una más preocupada por la ortodoxia y el cumplimiento del modelo macroeconómico neoliberal, y (2) la otra más inclinada a concertar con los productores. Sin embargo, ambas corrientes coinciden en afirmar, aunque no deje de parecer demagógico, que la definición de objetivos de la nueva política está sustentada en un “intenso y fructífero” proceso de consultas con los sectores social y privado (Téllez:10, 130-132; Gordillo 1990: 2). En palabras de Téllez:

(Se) creó un consenso nacional sobre las modificaciones más importantes realizadas en el rumbo de la política agropecuaria. En este proceso de concertación, todas las organizaciones que conforman el Congreso Agrario Permanente, la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior (COECE), la CNG y las demás organizaciones han desempeñado un papel fundamental. El productor agropecuario mexicano, en lo individual y en el contexto de sus organizaciones, conoce a fondo la problemática actual del campo en México y tiene bien ubicados los retos del sector agropecuario en el marco de la globalización internacional (1994 : 10).

El nuevo estilo de intervención en el campo

Es importante explicitar lo señalado en el párrafo anterior. Es decir, que la modernización del campo mexicano se significa, primordialmente, por dos aspectos. Por un lado, plantea como necesaria la reformulación de la relación Estado-productores y, por otro lado, concibe dicha reformulación como un prerrequisito que asegura la “eficiencia para la competencia y la exportación”, idea que se ha constituido como el principio rector de la economía mexicana.<sup>4</sup>

En lo tocante al sector agropecuario, la reconversión del Estado mexicano se finca, idealmente, en esquemas de apoyo más equitativos y

4. En este sentido, Téllez argumenta que lo que significa la modernización de la agricultura es el cambio de las funciones de los organismos e instituciones gubernamentales que iban desde la investigación, difusión de tecnologías, construcción y operación de

efectivos y no, como se ha argumentado, en la completa desaparición del Estado del ámbito rural. Visto así, es mejor hablar de un “adelgazamiento” del Estado. Esto significa asignarle, o reasignarle, nuevos roles. Entre éstos estarían: (1) proveer un marco normativo para asegurar la eficiencia y establecer un equilibrio entre los sectores productivos; (2) desarrollar la infraestructura que no pueda ser provista por los productores privados; (3) intervenir directamente en los mercados agropecuarios cuando existan fallas o se justifique socialmente la intervención; (4) proporcionar apoyos directos (que no subsidios) a productores cuando lo ameritan las distorsiones de precios internacionales; (5) formular programas específicos de ataque a la pobreza; y (6) velar por la utilización racional y eficiente de los recursos públicos (Téllez 1994:153).

La reconceptualización e implementación de macro políticas por parte del Estado mexicano configuraron el contexto en el que surgen organizaciones como El Barzón y **COMAGRO** relacionándolos, por ello, con algunos resultados inmediatos de la política de modernización. Discutiremos a continuación las implicaciones de algunas de estas medidas.

(1) La desincorporación y privatización de empresas paraestatales y de la banca

Este proceso, plagado de ambigüedades y contradicciones, se dio con una gran rapidez en un periodo de sólo tres años. Así, de 103 entidades y organismos paraestatales en el sector agropecuario que existían en 1989, quedaron sólo 26 en 1992 (Téllez 1994: 212). La desincorporación y privatización de estas empresas trajo aparejadas modificaciones significativas en la orientación y la organización productiva de las mismas. Liconsa, por ejemplo, restringió sus operaciones en el abasto social de tal manera que abandonó su ingerencia (1) en la regulación del mercado industrial de lácteos y (2) en el fomento de la producción de

---

distritos de riego, planificación de cosechas, control de exportaciones e importaciones, compra-venta de granos básicos, producción de insumos para la producción, hasta el crédito y el manejo de agroindustrias (1994:13). Esto representa la modificación de un ejercicio presupuestal equivalente al 20% del valor total del Producto Interno Bruto, PIB, agropecuario y forestal.



leche (de la Fuente 1989: 227). Fertimex, por su parte, fue liquidada transfiriendo todas sus funciones a grupos de productores, privados y sociales. Así, y contrariamente a lo que la Fuente (1989) ha propuesto, la venta de estas paraestatales no ha implicado la total monopolización de estas empresas por firmas foráneas o nacionales, sino que ha abierto el espacio para nuevas formas de participación de los productores que han surgido de procesos de negociación y conflicto -como es el caso de **COMAGRO** que analizaremos con detalle en la tercera sección. Con la venta de los bancos sucedió algo semejante a lo que pasó con las industrias paraestatales. La privatización se dio con contradicciones y ambigüedades, ya que el gobierno mexicano se vio forzado a ofertar las instituciones bancarias como “negocios atractivos” a bajo precio. Esto lo hizo a sabiendas que los bancos estaban agobiados por grandes pasivos.

(2) La transformación del sistema de crédito  
y de aseguramiento

Los cambios en el sistema crediticio consistieron en la eliminación de todo tipo de subsidios incluidos en el crédito, que tradicionalmente se otorgaban a través de la aplicación de tasas de interés diferenciales menores a las del mercado y esquemas operativos más flexibles. Esto implicó, al mismo tiempo, un tratamiento especializado e integral en el que a los demandantes de crédito y seguro se les diferenciaba por tipo de productor y capacidades productivas y, según los resultados de tal clasificación, se canalizaban hacia las instituciones más adecuadas para su atención. En consecuencia, los productores con potencial productivo alto se dirigen a la banca comercial con el objetivo de consolidar sus niveles de competitividad y capitalización. Los productores con potencial medio que no tienen acceso a la banca comercial son canalizados a Banrural o a Agroasemex. Finalmente, los productores de bajo o nulo potencial productivo se les destina a los Programas de Ayuda de Pronasol.<sup>5</sup>

5. Para una discusión más amplia de este proceso, ver Aspe 1993:62-110; Ortiz Martínez 1994:215-228; Téllez 1994:156-162; Villarreal 1993.

La reorientación del sistema de financiamiento perseguía como objetivo el permitir, en teoría, la transferencia de sujetos de crédito hacia el nivel inmediato superior una vez alcanzada la consolidación en su estrato. En la práctica se confirma una política de asignación del crédito de forma individual, haciendo a un lado las negociaciones colectivas. Estos cambios han llevado al fortalecimiento de un grupo reducido de productores y a la ampliación del capital extranjero en determinados procesos y fases de las cadenas productivas agropecuarias (de la Fuente 1992: 227); consideran, además, la “depuración de los productores por niveles de eficiencia” y, con ello, su “reconversión productiva”.<sup>6</sup>

(3) La desregulación del mercado y la liberalización de las exportaciones

El proceso de apertura comercial del sector agropecuario se dio de forma gradual desde mediados de los ochenta. Sin embargo, la liberación a que se ha llegado recientemente es muy significativa. Téllez señala, por ejemplo, que en 1985 estaban controladas 23% de las fracciones de importación en el sector, representando un 79% del valor total de las importaciones; mientras que para 1990, sólo un 6.4% de las fracciones estaban controladas, representando éstas un 11.8% del valor de las importaciones agropecuarias (1994: 126-129). Por otro lado tenemos que, en 1990, el gobierno liberó los cultivos de exportación (Ibid.). Para el caso de la producción hortofrutícola de la costa de Jalisco esta medida tuvo especial relevancia, ya que permitió que cualquier productor sembrase sin exigirle ser miembro de, o contar con el permiso de exportación otorgado por la Unión Nacional de Productores de Hortalizas, UNPH. Se eliminaron, así, las restricciones cuantitativas de superficie o de tipo de cultivo. Esto trajo aparejado que los productores hortofrutícolas “perdieran la capacidad para hacer extensivas y obligatorias las disposiciones que les habían permitido regular el subsector y financiar (sus) programas y actividades” tanto al interior del país como

---

6. Rodríguez Gómez, M. Guadalupe 1993-1994, Notas de Campo.

en el extranjero (González Chavez 1993). En otro orden de cosas, estas medidas de apertura representaron una doble oportunidad para el Estado ya que le permitieron, por un lado, atender la demanda del sector de productores sociales que reivindicaban el fin de la marginación de la producción de hotalizas a la que habían estado sujetos históricamente y, por otro lado, le permitió construir las condiciones para intentar una nueva forma de control de las exportaciones.

#### (4) La reconfiguración del sistema de subsidios

El cambio en las prácticas de subsidio es una expresión de la lógica tecnócrata que subyace bajo la idea de que la existencia de un determinado subsidio estatal, ya sea en la venta de insumos o en la prestación de servicios, repercute desfavorablemente al crear condiciones de producción “artificiales” entre los agroproductores mexicanos. Siguiendo esta lógica, se construye un argumento, coherente en apariencia, que sostiene que el exceso de subsidios a los productores mexicanos incapacita para competir con los agroproductores de otros países. El retiro de subsidios al campo obedece, además, a la pretensión de un Estado “eficientista” que, en su búsqueda de “modernidad” a toda costa, pretende terminar con la imagen (y prácticas) propia(s) de un gobierno paternalista. Vistas así las cosas, la decisión correcta no parece ser otra que la de abandonar las formas de subsidio generalizado a la producción agropecuaria. A lo que se llega es a una propuesta alternativa de “racionalización” del esquema de apoyos, lo cual implica la transformación gradual de los subsidios a través de los precios de los productos y del costo de los insumos, incluyendo el crédito y, sobre todo, la introducción de una nueva figura que se denominó “apoyos directos al productor”. Estos últimos son el punto medular del Programa Procampo (1993).

Después de haber hecho una breve revisión de las principales transformaciones en el diagnóstico y diseño de los programas dirigidos al sector agropecuario y de que se mostró que, al menos, en la retórica oficial se enfatiza el hecho de que se trata de una “política concentrada” con los productores, cabe preguntarse cómo se traduce en diversas circunstancias y qué consecuencias políticas conlleva. Con tal propósito

nos hacemos una serie de preguntas:

- ¿Acaso los diagnósticos en los que se conformó el diseño de la política de modernización del campo y que informan el diálogo con los productores desconocen las dinámicas de lo cotidiano y otros condicionamientos históricos?
- ¿Qué espacios abren estas políticas -en calidad de flujos de negociación- para la consolidación y capitalización efectiva de las organizaciones de los agroproductores?
- ¿Cómo emerge y se consolida un movimiento de protesta como efecto político de los conflictos entre agroproductores y las instancias gubernamentales? Y ¿cómo es que el problema de las “carteras vencidas” se convierte en el cuestionamiento global de la política neoliberal?
- ¿Qué relación tienen estos movimientos con la “crisis” de representatividad que se experimenta al interior de las otras organizaciones corporativas del Estado?
- Finalmente, ¿cuál es el rol que estas organizaciones emergentes han jugado en la reconfiguración de las políticas agropecuarias?

En las secciones siguientes exploraremos estas preguntas. Nuestra reflexión se centrará en el plano de la implementación de la política y hará énfasis en los significados de los conflictos y negociaciones, así como en las transformaciones introducidas sobre la marcha.

## II.- El Barzón y la provocación cotidiana a la modernización

El 25 de agosto de 1993, llegaron a la Plaza de Armas de Guadalajara 110 tractores procedentes del sur y costa del estado de Jalisco, acompañados de un nutrido grupo de ricos y medianos agroproductores descapitalizados y cargados de deudas.<sup>7</sup> El espacio cotidiano de Guadalajara se reconfiguró con el grito ruidosamente silente de los agroproductores impreso en las leyendas que enarbolaban los tractores y las trilladoras disidentes clamando:



“Se venden tractores para el pago de intereses”,  
 “Soy agricultor y estoy en quiebra porque no soy político ni narco”,  
 “Liberarismo social que ha destruido al campo productivo”,  
 “TLC=fiasco=a regalar la patria a los gringos”,  
 “Las plagas más dañinas que ha tenido nuestro campo son la usura, la corrupción y la mentira de falsos líderes”,  
 “¿Qué entenderá el gobierno cuando habla de modernización, democracia y solidaridad porque nuestro pueblo vive todo lo contrario: hambre, miseria y explotación?”.

A partir de entonces, y durante los 52 días siguientes que duró “la toma de Guadalajara” por los barzonistas,<sup>8</sup> las rutinas diarias de muchos jaliscienses adoptarían nuevos ritmos y formas. Por ejemplo, los tractores y las movilizaciones causaron problemas constantes de tráfico. Su presencia en el centro llegó a provocar que los amantes de las serenatas de la banda del Estado se privaran de ellas en varias ocasiones. En contraste, maquinaria y productores se convirtieron en un atractivo para las y los turistas y paseantes que querían tomarse fotos junto a ellos. Curiosamente, la solidaridad entre los barzonistas y visitantes del centro se bordaría con el diario compartir del agua que los bomberos ofrecían y las comidas que los pueblos y los grupos de las parroquias preparaban para los productores estacionados en Guadalajara. Por otro lado, los tractores alternaron la escenografía para la celebración de las fiestas patrias, a pesar de las afirmaciones que el gobernador interino hizo sobre el evento en sentido contrario. De hecho, el alargamiento del plantón fue motivo de gran preocupación para el gobierno del estado. Así

7. Esta sección desarrolla dos argumentos metodológicos. De una parte recaba las expresiones cotidianas de las situaciones de conflicto y negociación; y de otra identifica los mecanismos que permiten entender cómo se forja la movilización social. Así, la elaboración de este texto implicó la construcción de distintas arenas de información, tales como entrevistas a diversos informantes (miembros de la base, dirigentes, funcionarios, banqueros, miembros de los grupos solidarios y enemigos abiertos del movimiento), observación participante de los procesos de organización cotidiana, hemerografía y la revisión de la literatura respectiva. Aclaramos, sin embargo, que no se trata de un análisis exhaustivo del proceso del movimiento. Proponemos, por ello, que para un seguimiento cronológico más detallado del discurso, del conflicto y de las negociaciones, se recurra a las excelentes recopilaciones elaboradas por *Siglo 21, El Occidental La Jornada del Campesino* y la revista *Jalisco Hoy*. Señalaríamos, finalmente, que las citas que aparecen en el texto sin referencias corresponden a notas de trabajo de campo.

8. Cuando usamos el término “barzonistas” nos referimos a los agroproductores que se identificaban, y eran identificados, como miembros o dirigentes del movimiento.

se entiende el que las autoridades manejasen como un logro la salida de los tractores del centro justo antes de que se celebrase el desfile de las Fiestas de Octubre. A través de todo ello podemos ver algunas de las formas en las que los barzonistas y su maquinaria habían ya formado parte de una nueva cotidianidad. De hecho, se llegó a decir que se les iba a extrañar cuando se retiraran definitivamente de la ciudad.

La llegada de los agroproductores, con su maquinaria agrícola y sus demandas, representaba una nueva forma de abordar el “problema de las carteras vencidas”<sup>9</sup> y en tanto que se manifestaba como efecto político que corroboraba el fracaso de las nuevas prácticas crediticias. El plantón era, además, un corolario de la experiencia de los miembros de El Barzón que inútilmente habían tratado de resolver el problema crediticio a través de largos meses de “diálogo” y negociaciones con las autoridades y con los banqueros del sector privado y público. Según el Centro Bancario de Guadalajara, en los momentos iniciales de esta movilización 7,047 productores jaliscienses habían caído en “cartera vencida”; 30.8% de éstos tenía deudas con la banca privada, mientras que el 69.2% de ellos las tenían con Banrural (*Siglo 21*, Agosto 26, 1993, p:5; *Siglo 21*, Agosto 28, 1993,p:1)

Con el plantón en Guadalajara culminaba la marcha iniciada días atrás con las tomas de cuatro cabeceras municipales de Jalisco bajo el grito:

“Nosotros jamás autorizamos a quien planteó la política económica para que se instalara un libertinaje comercial, los autores de ella deben asumir su responsabilidad y no hacerlos pagar sus efectos (citado en *Siglo 21*, Agosto 17, 1993,p:6).

---

9. A las “carteras vencidas” se las ha definido simplemente en términos técnico-legales. Así, a la opinión pública se le ofreció una versión de la “cartera vencida” como “todos aquellos créditos otorgados por instituciones financieras que no habían sido cubiertos en los plazos convenidos” (*Siglo 21*, Agosto 26, 1993, p:5). En consecuencia, la gravedad del problema de las carteras vencidas radica en el hecho de que “además de los intereses que genera el crédito, se generan intereses moratorios sobre saldos insolutos, lo que multiplica la deuda” (*Ibid.*). Dicha multiplicación de la deuda puede conllevar la falta de rentabilidad de la producción agropecuaria. De esa manera, la producción agropecuaria quedaría expuesta a una situación de quiebra generalizada casi irreversible como resultado de condiciones históricas acumuladas. La cartera vencida es también, por tanto, un problema político.



Con estas movilizaciones, los agroproductores demandaban a los bancos y al gobierno federal:

- (1) La renegociación de las carteras vencidas.
  - (2) El retiro de intereses y nuevos créditos más baratos.
  - (3) El cese de acciones judiciales y embargos.
  - (4) La devaluación del peso a términos reales.
  - (5) El freno a las importaciones de productos agropecuarios por constituir competencia desleal.
  - (6) Programas efectivos, “no ficticios”, de apoyo (al campo)
- (citado en *Siglo 21*, agosto 26, 1993, p:1).

Para una sociedad acostumbrada al silencio, estas voces de protesta ciertamente suenan discordantes. Empero, contra lo que pudiera parecer “más lógico”, no se trataba de una conjura urdida desde la estrategia de líderes radicalizados de la oposición o de políticos resentidos. Por el contrario, el contingente mayoritario de los que protestaban se ufana, hasta hace poco, de ser activos priistas. No era extraño, por eso, que entre los dirigentes del movimiento se encontrasen presidentes y ex-presidentes municipales, líderes y miembros activos de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Confederación Nacional Ganadera (CNG) y de la Confederación Nacional de Pequeños Propietarios Rurales (CNPPR). Miembros del grupo dirigente tanto como de la base pertenecían también a organizaciones no-partidistas como la UNPH y otras no-oficialistas como el PRD, el PAN y el PDM.

#### Las metamorfosis de la organización barzonista

Es interesante observar que los cambios de retórica y de las estrategias de lucha al interior de El Barzón se van fraguando por exigencias de la negociación y al calor de los conflictos con sus opositores. Aunque este movimiento inició acciones reivindicativas esgrimiendo una posición no-corporativista e impidiendo que líderes corporativos y políticos partidistas se apropiasen de El Barzón, en un principio abrigaban la esperanza de obtener alguna posición de importancia dentro de las organizaciones

corporativas que les permitiera avanzar en la negociación. En consecuencia, a diez días de iniciado el plantón, los barzonistas se lanzaron a la lucha por la dirección estatal de la Federación de Pequeños Propietarios Rurales, FEPPR, presentando su candidato. Los barzonistas fracasaron en su intento y atribuyeron su derrota a una “mano negra” (elección manipulada de adentro y de afuera de la federación).

El movimiento no estaba constituido por un contingente estrictamente definido. Al contrario, se caracterizó por el flujo y rotación de ejidatarios y pequeños productores deudores, así como de agroproductores simpatizantes atraídos por la idea de la reducción, o quita, de intereses y de otros avances (la regulación de las importaciones y la participación en el diseño de las políticas agropecuarias, entre otros), que se percibían como esperanzadores. La idea de considerar a todos los agroproductores como el sujeto de la organización permite al movimiento trascender la lógica de las organizaciones corporativistas centrada en las demandas por sectores que separan a los ejidatarios entre sí y con respecto a los pequeños propietarios.

Los grupos pioneros del movimiento (Autlán y Ciudad Guzmán) concibieron como estrategia el contar con un respaldo campesino y popular que les permitiera mantener la protesta al salir los tractores de sus municipios. Ciertamente, en sus pueblos hubo quien se enroló en forma espontánea a la marcha, simplemente al verlos en la plaza. Muchos más, sin salir de sus pueblos, les apoyaron con alimentos y dinero. Otros, sin embargo, les negaron apoyo por considerarlos “rancheiros ricos” o “gente del gobierno”. Camino a Guadalajara, los productores en protesta pasaron por los pueblos exponiendo las razones de la marcha y pidiendo apoyo. Gente se les unió entonces, como también se incorporaron cuando montaron, en la Plaza de Armas de Guadalajara, las mesas para anotar a los miembros del movimiento y llevar cuenta de los casos de carteras vencidas en espera de negociación. Aunque los tractores permanecieron en Guadalajara, los agroproductores -y sus líderes- iban y venían de la ciudad a los pueblos, combinando su apoyo físico y moral al plantón, con sus obligaciones productivas y familiares.

En este punto, cabe preguntarse ¿cómo fue que El Barzón, tratándose de un grupo de productores con condiciones e intereses tan diferencia-



dos, con compromisos y militancias divergentes, que iban y venían de sus pueblos a Guadalajara, permaneció por más de 52 días en plantón? Y, además, ¿cómo logró transformarse en una organización -estatal y nacional-<sup>10</sup> de agroproductores independientes que planteó alternativas a la problemática agropecuaria y cuestionó la política de modernización?

Para responder esta pregunta y entender cómo se forjó El Barzón, haremos un análisis más específico de los métodos y formas de organización que este grupo utilizó durante su proceso de lucha reivindicativa.

#### El carácter emergente de las estrategias de lucha

Antes de lanzarse a la marcha, los productores en protesta buscaron la solución a la problemática del campo adoptando un estilo de negociación dentro de las maneras “tradicionales” de hacer política en Jalisco. Señalaríamos, no obstante, que éstas corresponden también a las formas de “diálogo pacífico”, como las llaman Aspe (1993) y Téllez (1994), características del régimen actual. La ruptura y continuidad que representan la marcha y el plantón de El Barzón ilustran cómo se construyen las nuevas formas de lucha y negociación. En búsqueda de otras formas alternativas, estos productores convirtieron el ritmo de marcha de los tractores hacia Guadalajara en un espacio simbólico de negociación. Los tractores avanzaron lentamente, “con la intención de presionar para encontrar solución antes de instalar la maquinaria en Guadalajara” (dirigente del movimiento citado en *Siglo 21*, Agosto 22, 1993). Sin embargo, la amenaza de dejar los tractores en Guadalajara y trasladarse a la ciudad de México representaba, de hecho, una forma de negociación en línea dura que se entretejía con las nuevas estrategias de negociación.

No es extraño, por eso, constatar que en el lenguaje cotidiano los agroproductores expresen versiones estereotipadas sobre lo que representa el “diálogo pacífico”, que difieren de la imagen optimista que el discurso oficial les concede. Dichas versiones cuestionan abiertamente las posibilidades de solución provenientes de reuniones celebradas en

<sup>10</sup>. Se constituyen como la Federación Estatal de Productores Agrícolas “El Barzón”, A.C. (FEPABAC) el 25 de septiembre de 1993. El 8 de noviembre del mismo año nace la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios “El Barzón”.

Casa Jalisco, en el Palacio de Gobierno y en las centrales corporativas en las que los interlocutores eran funcionarios sin capacidad de decisión. En la experiencia de miembros de El Barzón, dichas “mesas de diálogo” eran, en el mejor de los casos, foros informativos para escuchar la voz cantante de los directivos y funcionarios, quienes simplemente comunican acuerdos previamente tomados.

La idea que informaba estas acciones, y que informaría acciones posteriores, era el creer en la necesidad de abrir el espacio para la negociación, antes de iniciar acciones beligerantes que impidieran la reconciliación. Recordamos, a este punto, que el “diálogo” a través de las formas tradicionales de contacto con las autoridades se siguió dando, al tiempo que se configuraban nuevas prácticas de negociación. Una ilustración de cómo operaba esta dinámica se presentó cuando, en la noche anterior a la entrada a Guadalajara de los productores, aceptando la convocatoria al diálogo lanzada por el gobernador interino, se sentaron a negociar una vez más con banqueros y funcionarios del gobierno. Al día siguiente, en contraste, tomaron la Plaza de Armas y rechazaron aposentarse en el Agua Azul, como proponía el gobernador. Esto significó apropiarse del centro histórico de la ciudad y, al menos simbólicamente, introducirse en el centro de poder del estado de Jalisco creando, con ello, un nuevo espacio de negociación que les pertenecía.

Por otro lado, ya estando en Guadalajara, los de El Barzón tuvieron que combatir la imagen creada a través de medios oficiales y no oficiales de comunicación que sustentaban la hipótesis de que los más beneficiados con el movimiento eran algunos líderes que se habían gastado el dinero de los créditos en Las Vegas. Esto, en combinación con su estrategia inicial de crear bases de apoyo solidario en la sociedad tapatía, los llevó, en un segundo momento, a plantearse la necesidad de crear la imagen ante la opinión pública de tratarse de un movimiento reivindicativo que, aunque va más allá de la simple denuncia, lucha con medios pacíficos.

Las dinámicas de la negociación no se redujeron, sin embargo, a los líderes y sus formas de hacer política. La participación de las bases fue intermitente y se dio de formas variadas. Analizando lo que pasaba en las asambleas informativas, convocadas regularmente por la dirigencia



del movimiento durante el plantón, se puede observar cómo dichas asambleas se constituyeron en una arena cotidiana de preparación de las negociaciones entre los productores agropecuarios, el Estado y los banqueros. Estas asambleas se tornaron en un complejo ensamblaje de viejas prácticas corporativistas de hacer política con nuevas formas organizativas y participativas que rompían con el estilo corporativista de los agroproductores. Por ejemplo, muchos de los acuerdos estaban permeados por decisiones previamente arregladas que se presentaban hábilmente a “votación por primera vez”. Sin embargo, aunque esto pudiera interpretarse como un menor grado de participación de los productores en los procesos de decisión, esta práctica corporativista no impedía que hubiera un juego democrático en el cual los agroproductores exponían sus demandas y divergencias. La presencia de los agroproductores en las reuniones, tanto en la Plaza de Armas como en la toma de bancos y carreteras, imprimió su marca en la negociación. Al calor de la lucha y de la represión implementada por el Estado en contra de la organización, surgen nuevas formas organizativas en las que no sólo participan los productores apoyados por sectores sensibilizados de la sociedad jalisciense, sino que se incorporan a la negociación de las familias de los productores. Así, lo que había sido un movimiento de protesta predominantemente masculino se transforma al incorporar activamente al otrora símbolo de lucha: las familias de los barzonistas. Como sucedió en la última toma de los bancos, en que las mujeres y los hijos de los agroproductores, en vez de los tractores, se convirtieron en los protagonistas de la toma simbólica de las instituciones crediticias (ver *Siglo 21*, febrero 25, 1994, p.7).

En el estilo emergente de El Barzón inciden, también, los flujos de información, prácticas políticas y rotación de liderazgo. Es así que, iniciativas más radicales que surgieron paralelamente, como las de Chihuahua y Sonora, sirvieron para apuntalar el movimiento e, irónicamente, para reforzar el estilo de negociación más conciliador. A partir de la represión que sufrió El Barzón en Guanajuato (noviembre 26, 1993), la voz de Quirino Salas, secretario general de la organización y dirigente de El Barzón Zacatecas, se ha escuchado con fuerza a nivel nacional, aunque el presidente sigue siendo Maximiano Barbosa, líder del movi-

miento en Jalisco. En ese mismo sentido, las asambleas nacionales se trasladaron, a inicios del '94, de Guadalajara a Aguascalientes y a Zacatecas. Por otro lado, si bien a finales del '93 los líderes de El Barzón consideraban como estrategia de lucha el convocar foros de discusión de la problemática del campo con los principales partidos en la carrera presidencial, cuando se da el levantamiento en Chiapas, se inclinaron hacia alternativas de presión más beligerantes que les permitiesen restablecer las negociaciones que estaban estancadas. A fines de enero de 1994, por ejemplo, convocan nuevamente a una marcha de protesta hacia la ciudad de México. A renglón seguido, sin embargo, reorientan sus acciones y se entrevistan con el obispo Samuel Ruiz, negociador de la paz en Chiapas, para hacerle llegar una nueva carta de demandas al presidente Salinas.

Para sintetizar, queremos señalar que el seguimiento de las situaciones contradictorias, de los puntos ambiguos y de las conexiones entre los estilos convencionales y los emergentes, nos permitió entender cómo se van forjando nuevas formas de hacer política entre los agroproductores. Estos flujos de prácticas sociales interconectadas se reprodujeron no sólo a lo largo de los meses en los que se dio el plantón, sino también durante aquéllos en los que se combinaron el endurecimiento de sus acciones, el silencio y el cambio en la forma de protesta. Es importante recalcar que este entretejimiento de formas de hacer política se vuelve más complejo cuando no sólo expresa las lógicas internas del movimiento, sino cuando reconoce éstas como constitutivas y conformadas por los flujos y dinámicas contradictorias que relacionan órdenes jerárquicos, intereses, recursos, prejuicios, ambigüedades y oportunidades que se abren o que se cierran a partir del actuar de los políticos, banqueros, empresarios y de todos aquéllos que intervienen en lo que se concibe como escenarios de política formal.

Las tácticas informativas en relación a los logros  
del movimiento

En el contexto de las luchas campesinas mexicanas, el contacto con el Presidente de la República ha sido el símbolo del acceso al centro de



poder. A partir del presidente Lázaro Cárdenas, de hecho, este contacto se identificó como un principio de solución a las demandas campesinas. No ha sido extraño, por ello, que alrededor del contacto con el Presidente se hayan construido mitos sobre su poder de resolución, de donde se fabrican múltiples versiones sobre acuerdos y esperanzas. En la práctica, sin embargo, la efectividad del contacto no ha sido siempre en relación directa con las posibilidades de resolución que se abren.

Los procesos de negociación de los agroproductores de El Barzón no son ajenos a esta usanza tradicional de luchas campesinas. A pesar de que, bajo diversas expresiones, reafirmaron su fe en el contacto con el presidente, como principio de solución, también se deslizaron hacia posiciones de duda como aquella de que “el presidente repitió el disco rayado de la solución caso por caso (de las carteras vencidas)” (*El Occidental*, septiembre 6, 1993, p.12, Segunda Sección); o aquella otra que afirma que “no se trata de chocar con la obra maestra del presidente Salinas (su proyecto neoliberal, el control de la inflación, la globalización y el TLC), sino de una autodefensa legítima” (*El Occidental*, septiembre 7, 1993, p.4, Segunda Sección). En un momento dado pareció, al menos retóricamente, que se había llegado a romper con la figura simbólica del apoyo presidencial. Más aún, se responsabiliza al presidente de la represión que se dio contra El Barzón, cuando se encaminaba con sus tractores hacia México. Los agroproductores basaron su interpretación en la coincidencia de que el encarcelamiento de sus líderes y el secuestro de sus tractores fue precisamente el día anterior al “destape” del candidato presidencial del PRI. Antes de esta ruptura, la información acerca de los logros y posibilidades derivados de las tres entrevistas con el Presidente (septiembre 5, septiembre 9, septiembre 19 de 1993) había servido para animar el proceso de organización y participación en la protesta.

El encontrar razones para la esperanza se había constituido en uno de los problemas centrales para dirigentes y bases. La complejidad de esa búsqueda radicaba en recrear los símbolos que permitiesen mantener el apoyo al movimiento por parte de agroproductores escépticos que se movían dentro de un mundo ambiguo de imágenes donde la solución final había quedado prendida, por fugaces momentos, entre los alfileres

imaginarios de las palabras o acuerdos sostenidos con el señor Presidente, por una parte; y, por otra, en la apreciación incierta acerca de los resultados a que condujeron las acciones más radicalizadas que terminaron en la represión. El levantamiento campesino de Chiapas permitió a los barzonistas percibir que las formas de protesta más beligerantes podían ofrecer mayores posibilidades de logros. En ese sentido, una nueva entrevista con el Presidente se vuelve nuevamente esperanzadora, en tanto que se daría en un marco de mayor presión.

Las circunstancias inciertas de una campaña presidencial más competitiva alentaban, también, nuevas oportunidades. El entonces candidato del partido oficial, por una parte, aunque ofreció en su retórica soluciones inmediatas para el problema de las carteras vencidas, en la práctica, sin embargo, se negó a escucharles. Por otro lado, los líderes de El Barzón percibieron al resto de los partidos (sobre todo al Partido de la Revolución Democrática, PRD, Partido Acción Nacional, PAN, Partido del Trabajo, PT, y Unión Nacional Opositora, UNO) como un canal abierto que les permitiría plantear su propuesta política de solución a los problemas del campo.

#### La construcción cotidiana de lo político

Mucho se discutió lo político o apolítico de las acciones de El Barzón. Los mismos barzonistas contribuyeron, en cierto grado, a mantener la ambigüedad de sus expresiones políticas cuando arguyeron que su organización era apolítica, en tanto que luchaban por una causa justa y perseguían demandas puramente económicas. La propuesta de los líderes era:

Hacer un modelo de organización antipartidista que reúna a todos los productores para establecer programas e influir en la política de importaciones, como lo hacen los productores estadounidenses.

Empero, más que pretender culpar a los barzonistas de indefinición política, lo que nos interesa es mostrar cómo su retórica se articula con

las ambigüedades que construyen el discurso político que se nos presenta bajo las diversas expresiones culturales que operan ante la opinión pública, las prácticas de El Barzón son en sí mismas políticas y/o susceptibles de politizarse, aunque se diga lo contrario.

Se trata, sin embargo, de una retórica pragmática que busca hacer avanzar los intereses de los agroproductores, que quiere responder a las aclaraciones que piden las bases y/o que pretende replicar a sus detractores. Y esto a pesar de que se manejen con posiciones oscilantes que van desde lo apartidista hasta diversos significados de lo político. Por ello, desde un principio se manifestó el carácter apartidista de El Barzón, cuando el coordinador previno a los participantes del movimiento para que se cuidaran de las “infiltraciones partidistas y gubernamentales” (agosto 31, 1993). Para los líderes barzonistas, la propuesta apartidista tenía como finalidad el reunir fuerzas políticas divergentes sin forzarlas a una militancia específica, aunque ofreciéndoles el respeto a la diferencia. El definir la organización como apartidista era también una forma de marcar distancia y diferenciarse de “la imagen negativa” de los dirigentes corporativos, a quienes acusaba de actuar guiados por intereses personales, afán de poder y docilidad al sistema. Posteriormente, los líderes de El Barzón contradijeron sus declaraciones apartidistas, llegando incluso a crear la imagen de la fuerza “política” del movimiento que podía desembocar en expresiones multipartidistas. El 6 de octubre, por ejemplo, el líder barzonista proclamó que “el campo podría ‘cobrar la factura’ al gobierno en las urnas” (en *Siglo 21*, octubre 6, 1993, p. 5). Con ello, se advertía simbólicamente al PRI del poder que tenía el movimiento con sus votos. Además, subyacente estaba el mensaje para el partido oficial en el sentido de que éste podría gozar del poder político generado por el voto de los barzonistas si, y sólo si, el Estado apoyaba sus demandas. Meses después, ante el silencio del candidato presidencial priísta a sus demandas, los líderes de El Barzón llegaron a afirmar que retirarían su apoyo al PRI en las elecciones, al tiempo que ofrecían sus votos a los candidatos que les habían escuchado (Cecilia Soto, PT, y Cuauhtémoc Cárdenas, PRD).

Los diversos interlocutores de El Barzón fueron construyendo significados diferenciados de “lo político” de El Barzón, en consonancia con los

cambios de las circunstancias en la negociación y de la identificación con sus intereses. De hecho, la fluidez en las interpretaciones incluyó percepciones contradictorias de lo político del movimiento. Estas dinámicas las ejemplificaremos con las declaraciones que sobre El Barzón hicieron distintos personajes. Para el obispo Lázaro Pérez Jiménez, representante de una de las instituciones que ha apoyado al movimiento desde sus inicios, El Barzón representaba un movimiento laico que enarbolaba demandas justas y que reclamaba solidaridad (*El Occidental*, agosto 28, 1993). En contraste, uno de los dirigentes de la Pequeña Propiedad en Los Altos, Sergio Flores Mena, definió a El Barzón como una “justa lucha” que ha cambiado radicalmente:

Hasta tomar un plano netamente político... (esto se debe a que) quieren una manifestación de sus problemas agropecuarios sin intervención de partidos o movimientos políticos (*El Informador*, septiembre 11, 1993, p.7).

El Barzón se politiza, entonces, en tanto que diverge y se separa de la dirección de la EFPPR y, por tanto, del PRI. En la misma línea, el diputado Jesús González Gortázar, presidente de la CPPR, señalaría que:

“La protesta de El Barzón es política y tiene mano negra, porque su objetivo es ‘poner piedritas’ en el camino de funcionarios susceptibles de ser candidatos (presidenciables)” (*Siglo 21*, septiembre 15, 1993., p.5).

Ante la pregunta que de dónde podría provenir la “mano negra”, González Gortázar agregó:

“(Yo) creo que viene de otros partidos, como son el PAN y el PRD, y de algunos miembros del PRI (*Ocho Columnas*, septiembre 15, 1993).



El presidente del Consejo Estatal Agropecuario, Francisco Mayorga Castañeda, expresó diferentes versiones sobre la politización de El Barzón. En un primer momento, el movimiento barzonista le pareció una “lucha justa” (*Siglo 21*, agosto 31, 1993, p.6). De hecho, sostuvo que dicha organización había logrado importantes avances al hacer ver las condiciones difíciles de la producción en el campo. Posteriormente, sin embargo, asienta que “El Barzón persigue fines políticos” ya que, después de haber logrado resolver muchas de las carteras vencidas, han llegado hasta afirmar que se “podrían levantar en armas”, por lo que la radicalización de su postura, agrega Mayorga, obedece a “querer llevar adelante un proyecto diferente al oficial del gobierno federal” (*Siglo 21*, febrero 18, 1993, p.6). Gil Elizondo, aunque reconocía a los barzonistas el derecho a presionar con propuestas “más radicales” a las que ofrecían las instituciones, consideraba que se habían mostrado como un grupo “muy politizado”, al buscar soluciones a las carteras vencidas “a nivel nacional”, tanto como al hacer planteamientos “de corte diferente a las políticas establecidas” (Ibid.).

A otro nivel, la politización de El Barzón se entendió como la solicitud de cambios en el sistema económico, que iban en dirección contraria a la lógica tecnocrática. Por ejemplo, Luis Téllez, subsecretario de la SARH, al definir el problema de las carteras vencidas como “no muy grave” para el sector social, explicó que:

“(Si) éste (problema) se politiza en cuanto a pretender la aplicación de una quita generalizada (de intereses bancarios), se propiciaría la descapitalización de la banca rural y no habría recursos para nuevas líneas crediticias (*El Informador*, octubre 18, 1993, p. 12-A).

Por su parte, Hugo Andrés Araujo, líder nacional de la CNC, definió a El Barzón como “un movimiento oportunista” de “doble trasfondo”. Al hacerlo, sostuvo que:

“Por un lado, es (oportunismo) político porque pretende crear una corriente rural para algunos partidos de oposición y, por

otro, es (oportunismo) económico porque ahí apuestan sus intereses grandes deudores” (*La Jornada*, noviembre 25, 1993).

Estas declaraciones revelan que el carácter político que se le atribuye a El Barzón va más allá de representar una confrontación entre expresiones ideológicas contrapuestas. Simboliza, por tanto, la disputa por definir los límites que marcan hasta dónde es negociable la política de modernización del campo, por un lado; y, por el otro, hasta dónde sus medidas son irreversibles. Estas declaraciones son, por ello, representaciones que explicitan u oscurecen, según el caso, los efectos políticos de las medidas macroeconómicas sobre los agroproductores.

Tenemos así que las declaraciones oscurecen, en primer lugar, la crisis que actualmente vive el campo mexicano y que evidencia el número tan reducido de agroproductores que son capaces de mantener la rentabilidad económica de sus empresas productivas bajo estas circunstancias. Dejan de lado, por ello, discutir si el funcionamiento del nuevo sistema crediticio bajo esquemas neoliberales es un fracaso que afecta a la mayoría de los agroproductores y que, en consecuencia, sólo beneficia a los menos y a los banqueros.

Estas declaraciones, por tanto, no proyectan la provocación cotidiana de El Barzón como un cuestionamiento al principio que descalifica como populista todo intento de reconfigurar el crédito rural en forma diferente a la que practica la banca privatizada. Ocultan, al hacerlo, el hecho de que las propuestas de El Barzón representan una solución que, de ser aceptada e implementada, conllevaría el cambio sustancial de la proporción de productores “beneficiarios” de, o “afectados” por, las políticas de modernización en tanto que plantea la capitalización, a través del crédito, para un número mayor de agroproductores; es decir, se incrementaría, con las propuestas barzonistas, el sector de productores con posibilidades de continuar con sus actividades económicas, mientras disminuiría aquél de productores hechos a un lado por la modernización. Esto es, lo que estas declaraciones dificultan es entender cómo las formas de capitalización económica se llegan a politizar de tal manera que dejan de ser (por si acaso alguna vez lo fueron) un efecto

económico “técnicamente neutral” de las políticas de modernización.

Estas declaraciones ignoran, además, un importante punto de discusión política planteado por El Barzón: cómo lograr que los banqueros compartan con los agroproductores los costos de la modernización. Esto último se convierte, en sí mismo, en un cuestionamiento del carácter “concertado” de las políticas de modernización argumentado por el Estado mexicano. Estas declaraciones muestran, finalmente, cómo se han desdibujado las diferencias o jerarquías entre metas macroeconómicas y políticas en medio de las circunstancias conflictivas por las que ha pasado el movimiento de El Barzón.

El entretrejimiento de lo político con lo económico, que evidenciaron las acciones de protesta barzonistas, se ilustra bien en los programas que el gobierno mexicano ha introducido a últimas fechas debido a las protestas campesinas, aunque no se reconozca públicamente. Por ejemplo, por más que las autoridades intentaron desvincular el lanzamiento del Programa Procampo con las presiones de El Barzón, los apoyos directos a los productores que ofrece dicho programa se anunciaron ante la perspectiva de generalización de las protestas antigubernamentales. Hay que pensar, por ello, que el Programa Procampo se puede considerar como una “solución radical” ideada por el gobierno mexicano para asegurar el control político. Ante la continuidad en las movilizaciones de El Barzón y siguiendo la lógica de Procampo, el gobierno ofreció a los agroproductores de Sinaloa un tratamiento a más largo plazo para las carteras vencidas, con condiciones “más suaves” a las que de palabra habían ofrecido los funcionarios de Hacienda a los barzonistas. Esto obedeció, en gran medida, al interés de las autoridades en evitar la insubordinación de los sinaloenses tanto como su alianza con El Barzón, pues se estimaba que éstas podían afectar en mayor medida. Algo semejante sucedió con los agroproductores de Chiapas, a quienes se ofrecieron mejores condiciones crediticias (condonación de 100% de todos los intereses moratorios) para evitar que sus demandas coincidieran con aquéllas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN (febrero de 1994).

Por otra parte, Luis Donaldo Colosio afirmó, como parte de sus ofertas de campaña política, que había soluciones más radicales para el proble-

ma de carteras vencidas rurales de las que se habían propuesto a la fecha. Siguiendo esta línea, se puede argüir que la propuesta reciente sobre la reestructuración de las carteras vencidas, hecha por la Asociación de Banqueros de México (ABM) (marzo 1, 1994),<sup>11</sup> a pesar de (o precisamente por) que no fue planteada en términos de “emergencia política”, representa una solución que rebasa lo que El Barzón y algunas centrales corporativas habían negociado verbalmente con los funcionarios de Hacienda y con algunos bancos en particular. Aunque dicha propuesta no cambia radicalmente el sistema de operación del crédito bancario, ésta sí modifica sustancialmente algunos de los términos políticos en los que las negociaciones se venían dando. En otras palabras, se trata de una solución política al problema de las carteras vencidas rurales en tanto que ofrece alternativas en bloque para todos los agroproductores, y no de forma individualizada. Ésta significa también sacrificios económicos efectivos para los banqueros y el gobierno de mayor cuantía a lo que se argumentaba que podían ofrecer. Y esto es radical, al menos para los analistas, sobre todo por la forma en que se expresa públicamente y por las complicadas circunstancias políticas que rodean dichas medidas a partir del levantamiento de Chiapas. La incertidumbre política creció aún más con hechos posteriores como el secuestro del magnate banquero (Harp Helú) y la muerte de Luis Donaldo Colosio. Lo político del nuevo esquema para renegociar las carteras vencidas se evidencia al plantearse éste como solución global, ante una audiencia nacional, a pesar de que para algunos miembros de El Barzón, dicha solución es insatisfactoria. Esta reacción crítica de los barzonistas, sin embargo, parece apuntar hacia un interés por adoptar condiciones más radicales y a demandar mayores sacrificios por parte del gobierno.

### III. COMAGRO: Los efectos inesperados de la privatización de una paraestatal

Los designios de la modernidad son casi inescrutables, lo de menos es

---

<sup>11</sup>. Esta propuesta consiste en la quita de intereses moratorios y la reducción de los intereses principales. Considera, además, el establecimiento de un período de gracia mayor y la ampliación del plazo de pago del capital a quince años.



que emanen de una verdad presidencial o provengan de las hipótesis de inteligentes economistas u hombres de ciencia al servicio, o no, del gobierno, puesto que lo característico en ellos es lo que representan. Es decir, se trata de imperativos categóricos que resultan de procesos globales irreversibles a los que hay que sumarse. Su fuerza/debilidad radica en el hecho de que se han constituido en dogmas que niegan la posibilidad de afirmar otras alternativas diferentes a las que nos ofrecen las tendencias modernizantes. De esta manera, una vez que se ha caricaturizado tan ferozmente el modelo del paternalista, sólo gente irracional, y/o que vive fuera de época, se atrevería a ir en contra de las ideas que propugnan el adelgazamiento del Estado y la supresión del paternalismo ineficiente.

Visto así, es “inconcebible” remar contra la corriente que promueve el desmantelamiento de paraestatales y rechazar la idea de reestructurar las funciones interventoras del Estado en la producción agropecuaria. Por ello, resulta útil el análisis de procesos concretos como los que abrieron el espacio para el surgimiento de **COMAGRO**.<sup>12</sup> Es precisamente en los momentos en los que se implementa la anunciada muerte del Estado paternalista cuando surgen conflictos y complicaciones prácticas a través de los cuales se pueden deconstruir tales designios. Dicho de otro modo, al examinar lo que sucede en estos “conflictos palaciegos”, se pueden entender las condiciones históricas pasadas por alto y el impacto político de la privatización. Esto a pesar de que se trate de negociaciones realizadas al interior de las instituciones gubernamentales parcialmente conocidas por la opinión pública.

### Los antecedentes de COMAGRO

La mayoría de las 31 organizaciones campesinas que confluyen en la integración de **COMAGRO** se crearon en el sexenio de Luis Echeverría. Según la descripción de Sinquin, Fernández y Gil, se trataba de Uniones Ejidales cenecistas que:

12. Metodológicamente, esta sección se elaboró con base en las entrevistas que se realizaron con asesores y dirigentes campesinos de COMAGRO, tanto como con recortes de prensa y documentos internos de dicha organización. El enfoque que

**(Se) dieron cuenta de (que obtendrían mayores) beneficios tanto sus dirigentes como los ejidatarios (de base) si aprovechaban la coyuntura de la organización y lograban romper con los patrocinadores de un solo sexenio. (En cierto modo), fue que creyeron en la institucionalidad de su organización campesina (1990:302).**

Los mismos autores señalan que, en Jalisco, dos grupos se distinguieron como pioneros: La Unión de Ejidos Lázaro Cárdenas de la ex-laguna de Magdalena y la Emiliano Zapata de La Barca. Dentro de estos grupos prendió la idea de una “reconquista”, que consistía en “recuperarse del fracaso de los proyectos impulsados por la administración echeverrista y de las imposiciones institucionales” (ibid). Se trataba de una confluencia de intereses entre dirigentes campesinos y promotores que, desde distintas instituciones del gobierno (Secretaría de Reforma Agraria, (SRA), el Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (Pider), el Instituto Nacional de Capacitación Rural (INCA), la CONASUPO, SAHR, Banrural, entre otros), trataban de promover la organización campesina: Luis Hernández se refiere a dichos promotores como brigadistas y los inscribe como parte de:

**Una consigna generacional que venía de los que vivieron el movimiento estudiantil de 1968 y que pretendía vincularse con el pueblo. Estos grupos de jóvenes se vieron dispuestos a llegar a lugares lejanos con la vocación de desatar procesos de organización y concientización, de participar en ellos y transformar al país desde abajo (1990:14).<sup>13</sup>**

**Por otro lado, la inserción de los promotores en los ejidos no fue difícil. Esto se debía a que, para la mayoría de los campesinos, los promotores eran agentes gubernamentales y, como tales, distaban de impulsar**

---

se adopta no es exhaustivo ni pretende hacer un análisis comparativo en relación a El Barzón. Lo que se busca es examinar otra cara de la implementación de la política de modernización. Dos son los objetivos que se persiguen: 1) dar cuenta de los conflictos y problemas prácticos implícitos y explícitos de la venta de paraestatales, y 2) analizar las formas en que los productores ejidales miembros de esta organización se han adaptado a dicha política.

13. Véase también la entrevista a Gustavo Gordillo en *Reglones* No. 10, abril de 1988, p.27-32.

tareas subversivas. Llegaron a gozar, por lo mismo, de cierta confianza entre los ejidatarios. Sin embargo, como bien afirma Hernández, los brigadistas “sufrieron la represión y tenían que saberse manejar con equilibrio para responder al mismo tiempo a los intereses institucionales y a los ejidales” (ibid:16).

Existen ciertas similitudes en los contextos donde se conformaron estas organizaciones campesinas, identificadas como colectivos en tiempos de Echeverría. En primer lugar, las zonas en las que surgieron no son ni deprimidas, ni atrasadas. Por el contrario, son regiones de ejidos con tierras de buena calidad productiva, bien comunicadas y orientadas a comercializar la mayor parte de su producción. Se trata, empero, de ecosistemas técnicamente limitados en cuanto a posibilidades de desarrollo por estar dedicados fundamentalmente a economías monoproductoras (maíz y otros granos básicos). De hecho, los productores tienen que pelear constantemente por alcanzar la rentabilidad y/o las posibilidades de sobrevivencia. Además, para llevar a cabo proyectos alternativos (mejoramiento de vivienda y de tierras, maquinaria, etc.) tanto como de desarrollo comunitario (servicios públicos, edificios y bodegas), estos productores dependen de los fondos estatales o de los recursos generados por su trabajo en Estados Unidos.

Según estimaciones del presidente de **COMAGRO**, cada productor obtiene un promedio de ingresos mensuales de 385 nuevos pesos (122 dólares) (*El Occidental*, noviembre 27, 1993, p:5-A). Esto, más el hecho de ser, en su mayoría, productores de maíz expuestos a condiciones muy variables de rentabilidad, fue lo que los ha hecho preocuparse por defender cualquier posibilidad de ingreso. Así, la acción unificada de los ejidos se organizó en torno al control del proceso productivo. Esto conllevó que las Uniones de Ejidos se reanimaran, impulsadas con el deseo de cientos de ejidatarios de reivindicar mejores precios para sus productos (maíz, sorgo o frijol), tanto como para los insumos de producción. De acuerdo con varios de los dirigentes, el problema crónico de la distribución de fertilizantes fue la “chispa que motivó a la gente a organizarse, porque los acaparadores los estaban haciendo pedazos” (Hernández 1990:35). Sinquin, Fernández y Gil coinciden en afirmar que, en el caso de la Unión de Ejidos de La Barca, a partir de 1981 se

empezó a plantear “el desasirse de la tutela institucional para manejar por su cuenta la distribución de fertilizantes y un programa de obras hidráulicas” (1990:303). Kirsten Appendini (1991) da cuenta de la lucha persistente de la Unión de Ejidos de la ex-laguna de Magdalena y de cómo estos ejidatarios lograron controlar una porción importante de la cosecha de maíz regional para luego venderla, de forma colectiva, a grupos industriales.

Por lo anterior podemos ver que, en las circunstancias históricas de las microrregiones donde se localizan las organizaciones propulsoras de **COMAGRO**, se venían desarrollando procesos de resistencia cotidiana para enfrentar lo que consideraban condiciones sociales intolerables. Es importante señalar que, de las experiencias acumuladas de luchas frustradas, o parcialmente exitosas, estos productores habían rescatado conclusiones positivas. Estas experiencias sirvieron, de hecho, para identificar las redes de acaparamiento del fertilizante y de los granos básicos donde transportistas, acaparadores, funcionarios y caciques aparecían estableciendo fluidas alianzas. Ello explica que existiese, entre los productores, sensibilidad para pelear contra dichas redes de acaparamiento.

Hacia 1985 y después de reiterados intentos, estos ejidatarios habían logrado obtener varias concesiones para distribuir fertilizantes. Hernández resume las ventajas que proporcionaban a las Uniones de Ejidos la venta y distribución de fertilizantes al explicar que:

La Unión vendía el fertilizante al precio oficial... eso (en sí mismo constituía) un gran ahorro para cada productor... (Por otro lado, la venta significaba) ingresos extras por la distribución, las maniobras y la bonificación que daba Fertimex al concesionario... (lo cual a su vez) representaba otras formas de capitalización para la Unión de Ejidos (1990:38).

Entre las formas y tácticas de resistencia cotidiana que los dirigentes ejidales y promotores adoptaron, estaba hacer alianzas con funcionarios federales que simpatizaban con sus intereses. La larga lista de funcionarios que participaron en estas redes se inicia con Sergio Reyes Osorio,



entonces subsecretario de organización de la SRA, y culmina con el entonces secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. Estos funcionarios eran identificados como aliados simbólicos, en tanto que, desde las instituciones gubernamentales y en estrecho contacto con los promotores y dirigentes de las Uniones, propugnaban la defensa de los intereses ejidales. De hecho, a su intervención directa se atribuye el logro de las primeras concesiones de distribución de fertilizantes por parte de las Uniones. Este tipo de alianzas con funcionarios federales configuró un modelo de relaciones que operaba en el contexto de la mayoría de organizaciones que se fusionaron en la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Regionales Autónomas (UNORCA), constituida en 1985. Dicho modelo mostraba una extraña contradicción ya que, por una parte, se contaba con la tolerancia del gobierno federal y, por la otra, existía hostigamiento constante de parte del gobierno estatal que apoyaba a caciques e intermediarios en contra de los ejidatarios.

La reestructuración administrativa de Fertimex  
y el proceso de privatización

El primer paso para la reestructuración de Fertimex se orientaba hacia la reducción de los centros primarios de distribución de fertilizantes en todo el país, de dos mil puntos de venta, a 200. A primera vista, esto podría interpretarse como el favorecimiento de la creación de monopolios. Los criterios técnicos que se establecieron para seleccionar los centros que permanecerían parecían confirmar tal interpretación. El perfil de los distribuidores seleccionados apuntaba hacia aquéllos que logran reunir los mejores volúmenes de tonelaje distribuido, que tuvieran capacidad asegurada de procesar información administrativa, que ofrecieran ventajas de almacenamiento y transporte y, sobre todo, que demostraran una mayor revolvencia de fondos. Sin embargo, la creación de monopolios de fertilizantes compitió en la práctica con la atracción que el control de los mismos ejercía sobre los productores. Esto se debió a que la venta de fertilizantes era un negocio muy atractivo que prometía ganancias seguras. En Jalisco, en particular, la demanda de

fertilizantes granulados ascendía a 500 mil toneladas siendo, de hecho, más que concurrida la convocatoria para reestructurar Fertimex tanto como el concurso para convertirse en socios privados de dicha paraestatal que se dio paralelamente. Así, mientras que en el resto del país el número de centros primarios decreció, en Jalisco subió de doce a 26.

En Jalisco acudieron al concurso varias Uniones de Ejidos, empresarios, transportistas, ex-dirigentes agrarios y políticos, incluido un hijo del entonces gobernador Cosío Vidaurri. El fantasma del monopolio que pretendía apropiarse de Fertimex en el estado surgió, entonces, detrás de la pretendida asociación empresarial Rubio-Campos-Cosío (RuCaCo). Esta asociación se constituyó formalmente como Fertijal. En un primer momento, la pretensión monopólica de Fertijal se expresó como un rumor al que tuvieron acceso los dirigentes de las Uniones por su relación con los grupos de UNORCA en contacto, a su vez, con funcionarios salinistas que participaban en las negociaciones para constituir los nuevos centros de distribución. Esta amenaza monopólica parecía más que factible debido a que este grupo de allegados al gobernador Cosío había logrado establecer un control monopólico en la construcción de obras y servicios públicos realizados en Jalisco. Rubio y Campos eran, además, prósperos empresarios y transportistas que habían crecido a la sombra de la burocracia de Fertimex y que aventajaban por mucho a cualquiera de las Uniones Ejidales interesadas, por su revolvencia económica y recursos de transporte.

Las negociaciones con los funcionarios de Fertimex en Jalisco no parecían ser favorables para las Uniones de Ejidos. En las reuniones en Guadalajara, por ejemplo, todo intento de avanzar en el logro de las concesiones parecía estar bloqueado. Los funcionarios de Fertimex no disimulaban sus simpatías hacia los protegidos del gobernador Cosío o en favor de candidatos solventes, tales como Transportes y Servicios (Tysa). Se ejercían, además, diversas formas de coerción contra los dirigentes de las Uniones y los promotores. Dentro de la Liga de Comunidades Agrarias de Jalisco, su dirigente estatal, Bernardo Gutiérrez, dócil a Cosío, satanizaba a las Uniones al caracterizarlas como “grupos rebeldes” que querían dividir a la CNC. Por otro lado, no sólo se marginaba a dichos representantes de reuniones, sino que se

llegó, de hecho, a amenazar a uno de los asesores de ser expulsado del país por ser extranjero.

El punto clave fue que una mayoría de ejidatarios de las Uniones se dio cuenta del problema y decidió evitar que la influencia política de Cosío echara por tierra el trabajo organizativo de muchos años. En este contexto, luchar contra el monopolio RuCaCo unificó a las Uniones. Por eso, en la confrontación, no sólo contó el contrapeso que ejercieron, dentro de la burocracia de Fertimex, los aliados de México como Hugo Andrés Araujo (entonces secretario de organización de la CNC y, posteriormente, secretario general de la misma) y Manuel Cadena (director general de Fertimex). Fue muy importante también la labor de convencimiento llevada a cabo por los ejidatarios, en el sentido de que las Uniones Ejidales podían constituirse como un organismo empresarial capaz de distribuir fertilizantes con sentido social. Al mismo tiempo, se operó un cambio de mentalidad, fruto de la lucha contra el monopolio, entre los dirigentes de las Uniones y varios campesinos de base, quienes se habían mantenido escépticos frente a la invitación que se les extendió para que se integrasen a UNORCA por considerarla muy radical en relación a la CNC. Durante los ocho meses que duraron las negociaciones con Fertimex en la ciudad de México, este grupo se mantuvo constante a pesar de que en algunas ocasiones tuvieron que ir a México hasta dos veces por mes. Este grupo jalisciense constituyó, de hecho, el 60% de los ejidatarios participantes al lado de campesinos de Sonora, Sinaloa y Guanajuato.

Precisamente cuando se presentó la exigencia de demostrar que las Uniones Ejidales eran capaces de administrar y operar los nuevos centros de distribución primaria, surgió la estrategia que constituyó a **COMAGRO**. Así, al ser comparados con otros distribuidores que los aventajaban, la respuesta de las Uniones fue compactar sus demandas y unir sus esfuerzos. De esa manera, el proyecto unitario de **COMAGRO** se perfiló a través de negociaciones internas que giraban en torno a la selección de los mejores lugares donde ubicar los centros que dichas Uniones administrarían. El punto es que se tenía que salvar el problema de los requerimientos técnicos (tales como poseer bodega de diez mil toneladas de capacidad, contar con estación o entrada de ferrocarril

cercana y tener una revolvencia que permitiera dar tres vueltas al año al tonelaje almacenado) pues sólo si se cumplía con las condiciones mínimas estipuladas se justificaba su creación como organización.

Para sortear el conflicto con las Uniones de Ejidos, Fertimex optó por una solución salomónica: prácticamente dio entrada a todos los interesados. Así, la RuCaCo logró quedarse sólo con dos centros de Fertimex mientras que **COMAGRO** se quedó con cuatro. El resto de los centros se repartieron entre la Pequeña Propiedad, una nueva comercializadora que surgió de los grupos fieles al líder de la CNC y otros empresarios.

El entrar a este juego de convertirse en grupo empresarial trajo aparejados cambios importantes, con efectos inesperados, para las Uniones Ejidales reunidas en **COMAGRO**. En un primer momento, las tareas más apremiantes parecían ser la transformación del esquema administrativo y el restablecimiento de las relaciones con Banrural (institución que, con el tiempo, se convertiría en su aliado financiero). Pero otros cambios cotidianos darían cuenta de las transformaciones de fondo que se requerían. Esto se puede ilustrar con lo que señala el presidente de **COMAGRO**, Antonio Hernández:

(Ya no éramos simples consignatarios) que nomás estaban en el escritorio cruzados de brazos esperando que vinieran pidiendo los fertilizantes... (sino que tuvimos) que buscar formas de agregar valor, vendiendo a granel, envasando y mezclando, así como diversificando los productos en venta (Revista Agro-Cultura 1994, 26:27).

Las confusiones entre los propósitos económico-políticos  
y el apoyo crítico al gobierno

Ante la opinión pública, **COMAGRO** ha cultivado una imagen de organización propositiva y pragmática que se caracteriza por su apoliticismo o neutralidad. Esta imagen la ha construido a través del constante autodefinirse como organización económica de segundo nivel, cuyos fines son ofrecer alternativas económico-productivas para sus agremiados. Por ello, la idea de que el control del proceso organizativo



de la producción es la finalidad política que constituyó a **COMAGRO**, es algo que se concibe e interpreta de diversas maneras, de acuerdo a las diferencias de audiencia y circunstancias de negociación que la organización confronta en distintos momentos.

Señalaríamos, no obstante, que dicho objetivo -el cual informa las acciones de los ejidatarios miembros, de los dirigentes y de los brigadistas por igual- es, en sí mismo, una expresión política susceptible de politizarse de diversas maneras. En esta línea, los asesores de **COMAGRO** afirman que, en México, no se puede avanzar en la gestión económica sin contar con relaciones políticas. Esto implica, para ellos, la necesidad de avanzar en la gestión y concertación con el Estado y sus agentes, por un lado; y, por el otro, desarrollar relaciones gremiales para lograr algún grado de influencia en la definición de políticas, tanto como en el acceso a los recursos para el desarrollo. Así pues, en el caso de **COMAGRO**, al igual que en el de El Barzón, se da una retórica polivalente acerca de lo que constituye lo político de sus acciones y del carácter de sus estrategias políticas.

Dentro del mosaico de significados políticos que informan, y son informados por, la experiencia de **COMAGRO** existe una conceptualización negativa de lo político. Dicha noción se asocia, por ejemplo, al hecho de que la mayoría de los socios de **COMAGRO** conoce por experiencia propia lo que han significado los fracasos organizativos de las Uniones de Ejidos que se registraron a partir de la promoción gubernamental de los setenta y ochenta, ya que dicha promoción tuvo, en muchas ocasiones, fines más políticos que productivos. Es decir, dichos procesos organizativos representaron mayores beneficios para los funcionarios involucrados y para algunos dirigentes que para las mayorías campesinas.

A partir de dichos fracasos, los promotores concluyeron categóricamente que la cuestión no es apoyar, o no, las políticas estatales en bloque. Los promotores han hecho de ésta una conclusión válida ante las propuestas salinistas de modernización del campo. Aún más, ante la pregunta de que si ellos se consideraban colaboracionistas de una política salinista anticampesina que ha desmantelado las condiciones de producción en el campo, respondieron, sin temor a ninguna clase de

cinismo, diciendo que el productor no tiene otra alternativa más que la de seguir produciendo y tratar de sostenerse en condiciones más difíciles. Algunos de ellos fueron aún más lejos al afirmar que es entre los productores maiceros de Jalisco donde se puede apreciar la cristalización y operatividad de la propuesta modernizante del gobierno mexicano; aclararon, sin embargo, que esta apreciación sólo se podrá realizar en un periodo corto de sólo dos años, dado que se espera que el deterioro económico sea mayor después de la liberalización de precios del maíz que recientemente entró en vigor.

Bajo esta perspectiva, los asesores de **COMAGRO** consideran que, para los sectores ejidales, no hay muchas posibilidades de acceder a recursos y capitalización más allá de aquéllos que están bajo control del Estado. Consideran, al mismo tiempo, que los productores organizados pueden ocupar los vacíos que deja el Estado si las propuestas modernizantes se llegan a tomar. **COMAGRO** ha caído, así, en la tentación de asegurar los recursos y no tanto de pelear y demandarlos. En cierto modo, esto es lo que los ha llevado a afirmar que el desarrollo es primero que la democracia, dando a entender con ello, que es el poder económico el que determina al poder político.

En estas confusiones entre lo económico y lo político, la posición pragmática de los dirigentes de **COMAGRO** pretende situarse más allá de los problemas ideológicos y de los usos políticos. De lo que se trata, afirman algunos de ellos:

(Es) de resolver los problemas concretos de una baja productividad que se requiere levantar para poder competir... (por ello, lo que) se busca son los medios tecnológicos que se sabe están al alcance de los productores maiceros.

Con base en las experiencias se pretende, así mismo, tomar la política de apertura económica como una oportunidad y no sólo como una limitación.

La relación de **COMAGRO** con el Estado, aunque importante, es también conflictiva. Por ello, los apellidos de los políticos aliados se perciben como cambiantes siguiendo una lógica que trasciende los



sexenios. Para los miembros de esta organización es más propio, por lo mismo, hablar de acercamientos y alejamientos con los políticos o de que sigue habiendo recelos con los mismos. En lo que se refiere a las oportunidades que ofrece la política de modernización, lo que hacen los dirigentes de **COMAGRO** es practicar el “juego suicida” de retomar los roles que el Estado pareciera abandonar. Esto lo hacen por considerar esta suplencia como una de las cuestiones básicas para el país, en tanto que significa la autosuficiencia alimentaria y sobrevivencia de los campesinos.

De cualquier manera, debemos señalar que el punto de enfoque de **COMAGRO** difiere de la actitud “burocrática” de conservar los empleos, con la que operaban los empleados de SARH o Fertimex. En consecuencia, aunque los miembros de **COMAGRO** se saben “usados” por la CNC y por el gobierno estatal (el que los alaba retóricamente y los propone como modelo a seguir), continúan operando en un edificio rentado, y no de la CNC, para demarcar con ello cierta autonomía. En este sentido, las estrategias de **COMAGRO** son una compleja mezcla de intereses en la que no prevalece una sola lógica y en la que persisten, en contraste, las fricciones. Los miembros de esta organización son conscientes, sin embargo, de la existencia de ciertas ambigüedades y de que es necesario establecer muchos matices. Reconocen, por ejemplo, que se les obliga a trabajar dentro de ciertos márgenes y que se les apoya más cuando se circunscriben a generar procesos económicos sin puntualizar aspectos de, ni elaborar críticas a, las acciones del gobierno. Es decir, reconocen que no tienen total autonomía y si acaso ésta llegara alguna vez, argumentan los de **COMAGRO**, será cuando se tenga la certeza de contar con capitales. Saben, no obstante, que esto dependerá de trabajar con aliados financieros, ya que reconocen que los bancos sólo abren posibilidades cuando constatan que existen posibilidades de rentabilidad. Al hacerlo, los miembros de **COMAGRO** reeditan, una y otra vez, el sueño de la autonomía en lo económico respecto a lo político y manifiestan su creencia en una relación con los bancos por el negocio y no debido a cuestiones políticas. Por otra parte, en **COMAGRO** se han ido acumulando experiencias tales que les permiten afirmar a los miembros que las cosas se logran negociando. Al respecto recuerdan

cómo, en los principios del sexenio salinista, los tecnócratas neoliberales no aceptaban ni la más mínima modificación de su modelo y tenían prohibido, en concreto, proponer cualquier forma de subsidio. En este sentido, los de **COMAGRO** comentan que la propuesta de Procampo revela lo que se ha logrado cambiar a través de negociaciones.

Vistas así las cosas, resulta más adecuado referirse a **COMAGRO** como la representación de una posición de apoyo crítico a las políticas de modernización, que se funda en su auto-reconocimiento como una nueva institucionalidad intermedia, por un lado; y, por el otro, en el hecho de que estas políticas funcionan más por iniciativa campesina regional o local que como recetas aplicables para todo el país. Dentro de esta visión crítica surgen diversas concepciones interesantes. Algunos miembros de **COMAGRO** disienten de la idea de que la crisis se está resolviendo y enfatizan, al hacerlo, que la política de modernización no revierte la tendencia al deterioro del campo. Otros afirman que es mentira que estén llegando capitales extrnajeros al sector rural y se muestran reacios a aceptar las formas en que se negociaron los acuerdos de granos básicos en el TLC. Algunos otros tampoco aprueban la forma en que se ha enfocado el Procampo porque, en su decir, se está premiando a los maiceros menos productivos; es por ello, continúa el argumento de estos ejidatarios, que el Procampo puede considerarse como una muestra de la preocupación del Estado por el futuro de la conducta electoral de la mayoría (esto es, de dos millones de productores que producen menos de dos toneladas por hectárea), más que por el futuro del campo mexicano. Finalmente, **COMAGRO** se opone radicalmente a la propuesta de modernización del campo mexicano que, siguiendo la lógica eficientista, promueve la canalización de recursos hacia “los productores de más bajos ingresos” y el “establecimiento de programas especiales para combatir la pobreza extrema en el campo” (Téllez 1994:11). Esta organización propone, en contraste, la necesidad de hacer rentable la producción agropecuaria en zonas con una economía campesina similares a las de las Uniones de Ejidos.

A últimas fechas, la perspectiva a mediano plazo que se advertía desde **COMAGRO** se ha oscurecido notablemente. En consecuencia, se discute nuevamente el privilegiar la protesta para recuperar lo que se



prevé se perderá cuando se retiren las pocas formas de subsidio existentes y cuando el Estado abandone la comercialización de granos. Es, en este sentido, en donde coinciden, al menos parcialmente, con El Barzón: afirman que hacen falta más movimientos como el barzonista que hagan énfasis en los problemas económicos sin politizarlos, porque eso demuestra, según ellos, que los campesinos tienen capacidad organizativa y se pueden enfrentar de “tú a tú” con empresarios y transnacionales. En los hechos, sin embargo, esto significó un uso político de **COMAGRO** por parte de diversos agentes gubernamentales que querían demostrar que la política salinista no era un total fracaso. Por otra parte, los dirigentes no pudieron evitar afirmar que hay incertidumbre entre los ejidatarios y que se carece en México de una política que asegure la sobrevivencia de 800 mil productores maiceros que, a partir del TLC, van a enfrentarse con problemas mayores a los que venían enfrentando (en particular, el de los “coyotes” y los políticos influyentes). Para estos líderes campesinos, el nuevo reto es el de competir con las transnacionales y los productores norteamericanos. Agregan, al respecto, que si los agroproductores no cuentan con una infraestructura “tan bárbara” como la que poseen los varios agentes extranjeros, los productores mexicanos simplemente “no la van a poder hacer”.

#### IV. A manera de conclusión

Después de un largo análisis de la trayectoria del presidente Salinas en relación a la modernización, Tomás Borge cierra preguntándose qué tanto ha logrado el gobierno salinista en su intento por encontrar: la búsqueda de vías suaves para absolver “los pecados” del “capitalismo salvaje” (1993:223). Esta tarea, continúa Borge, se ha convertido en uno de los dilemas cruciales de la política de modernización salinista (ibid). Queda claro, en primer término, que el objetivo que plantea la visión salinista de la globalización es el de reactivar la eficacia productiva del capitalismo a toda costa. Si bien esto se ha logrado en principio, no parece haberse reparado en los costos sociales, ni tampoco en quién está pagando por ellos. De hecho, pareciera que se han tenido que pasar por alto las condicionantes históricas que representan los rezagos de justicia

social, así como dejar de poner suficiente atención a problemas cada vez más graves como la devastación ecológica, la democracia imperfecta y la pérdida de la confianza en lo político que se vive en México.

Tras la aprobación por parte de Estados Unidos del TLC en noviembre pasado, el programa neoliberal salinista aparecía como un proyecto con un alto grado de viabilidad. Sin embargo, las nuevas circunstancias sociopolíticas que se dieron durante el primer trimestre de este año (levantamiento indígena-campesino de Chiapas, secuestro del banquero Harp Helú, el asesinato de Colosio y, hasta cierto punto, los movimientos de protesta campesinos tales como El Barzón), parecieran haber desvanecido las expectativas creadas por dicha política. A este respecto, es preciso indicar que, más que las esperanzas, lo que se está desvaneciendo son las imágenes creadas por el aparato estatal en torno al éxito de las macropolíticas.

Como hemos visto a lo largo de este texto, las macropolíticas no existen como totalidad, ni tampoco son procesos homogéneos. Son, por el contrario, negociaciones sucesivas y puntuales, relacionadas siempre entre sí. Es por ello que no se pueden aislar artificialmente de sus condicionantes históricas, como tampoco es posible desconectarlas del dinamismo de las redes de poder e intereses económicos en disputa. En consecuencia, la emergencia de líderes, las consecuencias del trato a un grupo social que se beneficia (o es afectado) por las medidas de tipo político, los cambios en las expresiones ideológicas y en las prácticas políticas, los avances y retrocesos organizativos, las desventajas y condiciones de descapitalización, las características regionales y los conflictos cotidianos no se pueden reducir al minimizarles en tanto “factores micro” que se tienen que subordinar, en calidad de factores “secundarios”, a los dictados de las macro políticas. En contraposición, todos estos procesos -que se encuentran en espacios concretos de lucha, en discusiones y en conflictos específicos- son, de hecho, los que dan forma y contenido a lo político. El análisis de estos espacios y procesos es lo que nos permitió develar la diversidad de significados y prácticas que conforman la especificidad del neoliberal mexicano.

La experiencia de El Barzón representa la capacidad de organización de agroproductores frente a los retos al campo que la reconfiguración

neoliberal del mexicano ha conllevado, a pesar de no ser ni una estrategia planeada de oposición, ni una consigna urdida por políticos resentidos. El Barzón logró constituirse, en un breve periodo, en una organización campesina no convencional: que supera los esquemas organizativos sectoriales; que agrupa, efectivamente, a agroproductores (pequeños propietarios tanto como ejidatarios) provenientes de distintas filiaciones políticas; y que responde a diversos intereses económicos. La política de El Barzón se construyó sobre el conflicto cotidiano y trascendió la representación extrapolada de un esquema clasista de prácticas y expresiones ideológicas polarizadas. Así, las nuevas formas de hacer política que se practican en El Barzón emergen de situaciones contradictorias en las que se remarcan los puntos ambiguos y se reproducen combinaciones confusas de negociación y lucha política que traslapan formas convencionales y nuevas de hacer política. En esa forja de prácticas políticas se combinan varias influencias, internas y externas, que van recreando diversos símbolos que evocan apoyo, solidaridad y esperanza en consonancia con los cambios de audiencia y condiciones de la negociación.

La provocación cotidiana de El Barzón no se redujo a una mera expresión de denuncia reivindicativa. Logró, de hecho, articular una protesta efectiva que impuso su marca a, sino es que indujo, las transformaciones de la política neoliberal de modernización. La lucha barzonista consiguió, entre otras cosas, redefinir aspectos de estas macropolíticas, considerados irreversibles. Si bien es cierto que no fue capaz de restablecer condiciones de rentabilidad para la producción agropecuaria, no puede dejar de reconocerse que ejerció tal presión que el sistema financiero se vio en la necesidad de hacer cambios importantes en sus políticas. De hecho, las presiones de El Barzón hicieron que los banqueros ofrecieran una solución política global (y no “caso por caso”, como inicialmente pretendían) al “problema de las carteras vencidas”; a este respecto recordemos que, durante su lucha, El Barzón esgrimió este problema como el efecto político que evidenciaba el fracaso de las políticas de modernización del campo. Se debe entonces cargar con una parte importante de los costos del reciente ajuste económico. Las demandas y negociaciones de El Barzón conllevan, además, en contra

de la más rígida interpretación neoliberal y tras la combinación de varios efectos, el replanteamiento del sistema de subsidios que se consideraba ya anulado. El Barzón representa, por tanto, la interconexión entre lo económico y lo político que se da en la práctica.

Si bien tanto El Barzón como **COMAGRO** representan procesos organizativos de agroproductores en búsqueda de alternativas económicas y políticas ante la actual crisis del campo mexicano, ambos se diferencian por sus estrategias políticas. La experiencia de **COMAGRO** también conlleva, como lo hizo El Barzón, planteamientos políticos paradójicos. **COMAGRO** se constituye a partir de una estrategia de lucha de agroproductores en contra de influencias políticas que intentaban monopolizar la venta de fertilizantes. Paradójicamente, sin embargo, esta organización considera también que lo único que justifica el logro de sus fines organizativos es la consecución de mayores beneficios económicos para sus agremiados. **COMAGRO**, en contraste con El Barzón, surge al interior de organizaciones corporativistas estrechamente vinculadas, no sin ambigüedades, a los aparatos del Estado mexicano. **COMAGRO**, a diferencia de El Barzón, emerge como una forma de apropiación de la modernización del gobierno mexicano por parte de ejidatarios, en tanto que toma ventaja de los procesos de desmantelamiento y privatización de empresas paraestatales. Esta organización, no obstante, se incorpora al proceso de redefinición de las negociaciones entre agroproductores y el Estado mexicano, tanto como al de construcción de nuevas formas de lucha campesina.

En esta línea, desde la experiencia de **COMAGRO** se pueden deconstruir las macropolíticas que inciden en la producción agropecuaria. Éstas no existen en bloque, ni son homogéneas. Por otro lado, es falso que la propuesta de modernización revierta el deterioro productivo, a pesar de que sea cierto que dicha modernización no contribuye directamente a acrecentarlo. Es por ello que la apertura económica tanto como el TLC pueden ser considerados como oportunidades y no sólo como limitaciones. De cualquier manera, lo que corrobora la experiencia de **COMAGRO** muestra porqué, para los agroproductores, el participar en el juego suicida de retomar los roles que el Estado pareciera abandonar significa, de hecho, recuperar objetivos nacionales básicos, como la autosuficien-



cia alimentaria y la sobrevivencia de los productores de maíz. Esto significa también afirmar la capacidad campesina de responder, en sus propios términos, a las transnacionales y a los empresarios extranjeros. Ante las condiciones desiguales de competencia que se avecinan con el TLC, por tanto, el logro de la institucionalidad intermedia que representa la participación de los agroproductores en la gestión agropecuaria parece ser más un derecho a la libertad conquistado a pulso después de muchas negociaciones y luchas, que el derecho al pataleo en una situación de agonía crónica.  

### Fuentes secundarias consultadas

- 1 *El Informador* de mayo de 1993 a marzo de 1994.
- 2 *El Occidental*, de mayo de 1993 a marzo de 1994.
- 3 *La Jornada*, de mayo de 1993 a marzo de 1994.
- 4 *Ocho Columnas*, de agosto de 1993 a marzo de 1994.
- 5 *Revista Agro-Cultura*, de enero a febrero de 1994.
- 6 *Revista Jalisco Hoy* de septiembre a diciembre de 1993.
- 7 *Siglo 21*, de mayo de 1993 a marzo de 1994.

### Referencias citadas

- 1 Appendini, Kirsten  
1992. *De la milpa a los tortibonos, la reestructuración de la política alimentaria en México*. México: El Colegio de México.
- 2 Aspe, Pedro  
1993. *El camino mexicano de la transformación económica*. México: Fondo de Cultura Económica.
- 3 Barkin, David  
1991. *Un desarrollo distorsionado: la integración de México a la economía mundial*. México: Siglo Veintiuno Editores y UAM-Xochimilco.
- 4 Blanco Mendoza, Herminio  
1994. *Las negociaciones comerciales de México con el mundo*. Colección Una Visión de la Modernización de México. México: Fondo de Cultura Económica, S.A. de C.V.

## Referencias citadas

- 5 Borge, Tomás  
1993. *Salinas, los dilemas de la modernidad*. México: Siglo Veintiuno Editores.
- 6 Caballero, Emilio  
1992 "El Tratado de Libre Comercio y la agricultura". En *La disputa por los mercados, TLC y sector agropecuario*. México: LV Legislatura y Editorial Diana.
- 7 Calva, José Luis  
1988. *Crisis agrícola y alimentaria en México, 1982-1988*. México: Fontamara.
- 8 Fuente, Juan de la, et al  
1992. "La ganadería nacional, nueva encrucijada en su desarrollo". En *La disputa por los mercados, TLC y sector agropecuario*. México: LV Legislatura y Editorial Diana.
- 9 González Chávez, Humberto  
1993 "Política liberal y corporativismo, las asociaciones de empresarios agrícolas". Documento sin publicar.
- 10 Gordillo de Anda, Gustavo  
1990. "Sobre la modernización del campo". Texto leído en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Documento sin publicar.
- 11 Guerrero Anaya, Francisco Javier  
1988. "Las organizaciones de productores rurales en México, interlocución con Gustavo Gordillo". En *Revista Renglones* Año 4, No. 10, abril.
- 12 Hernández, Luis  
1990. *La Unión de Ejidos Lázaro Cárdenas, autonomía y liderazgo en una organización campesina regional*. Cuadernos de Desarrollo de Base No. 1. México: Fundación Interamericana.
- 13 Marx, Karl  
1984. *The 18th Brumaire of Louis Bonaparte*. New York: International Publishers.
- 14 Marx, Karl y Frederick Engels  
1969. *The German ideology*. New York: International Publishers.
- 15 Ortiz Martínez, Guillermo  
1994. *La reforma financiera y la desincorporación bancaria*. México: Fondo de Cultura Económica.
- 16 Oswald Spring, Ursula  
1992. "El campesinado ante el Tratado de Libre Comercio". En *Agricultura y TLC, Cuadernos Agrarios*. Nueva Época, Año 2, enero-abril.

## Referencias citadas

- 17 Otero, Gerardo y Steffanie Scott  
1993. "Reestructuración de la agricultura mexicana: implicaciones sociales y ambientales". En *Cuadernos Agrarios*, 3 Nueva Época, Año 3, No. 7.
- 18 Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos  
1993 *Procampo, vamos al grano para progresar* México: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
- 19 1990. *Programa de modernización del campo* México: Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario (Inca-Rural).
- 20 Sinquin, Evelyne; Fernández, Teresa y Javier Gil  
1990. "La organización de los productores rurales en la zona occidental". En Fernando Rello (coord.), *Las organizaciones de productores rurales en México* México: Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- 21 Téllez Kuenzler, Luis  
1994. *La modernización del sector agropecuario y forestal*. Colección: Una Visión de la Modernización de México. México: Fondo de Cultura Económica, S.A. de C.V.
- 22 Villarreal, René  
1993. *Liberalismo social y reforma del Estado, México en la era del capitalismo posmoderno* México: Nacional Financiera y Fondo de Cultura Económica.
- 23 Weber, Max  
1961. *General economic history* Estados Unidos: MacMillan.